



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Secretaría
General

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

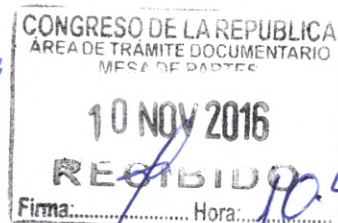
Miraflores, 09 NOV 2016

OFICIO N° 2870 -2016-JUS/SG

Señora Congresista
ALEJANDRA ARAMAYO GAONA
Presidenta de la Comisión de Descentralización
Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado
Congreso de la República
Presente.



0 19405



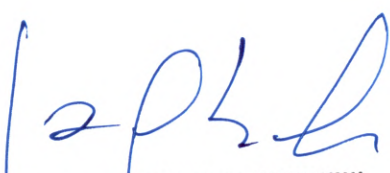
Ref.- a) Oficio P.O. N°074-2016-2017-CDRGLMGE-CR
b) Proyecto de Ley N° 175-2016-CR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la Sra. Maria Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, para saludarla cordialmente, y en atención al documento de la referencia a), alcanzar copia del Oficio N°960-2016-JUS/VMJ, y sus antecedentes mediante el cual se ha emitido opinión respecto al proyecto de Ley de la referencia b).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,


KARINA FLORES GÓMEZ
Secretaría General
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

"Año de la consolidación del Mar de Grau"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Miraflores,

03 NOV. 2016

OFICIO N° 960 -2016-JUS/VMJ

Señora Doctora

MÓNICA EMPERATRIZ SARAVIA SORIANO

Jefa de Gabinete de Asesores

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Presente.-

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GABINETE DE ASESORES	
03 NOV 2016	
RECIBIDO	N° Registro
Hora: 17:50	
Firma: 	

Ref.: Oficio P.O. N° 148-2016-2017-CJDDHH/CR-P

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita la opinión técnica del Proyecto de Ley N° 175/2016-CR, que propone la modificación de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

Al respecto, hago llegar copia del Informe N° 173-2016-JUS/DGPCP, el cual contiene la opinión técnica de este Viceministerio elaborada por la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria sobre el mencionado Proyecto de Ley

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


Edgar Carpio Marcos
Viceministro de Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 173 -2016-JUS/DGPCP



A : Dr. EDGAR CARPIO MARCOS
Viceministro de Justicia

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 175/2016-CR, que modifica la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

REFERENCIA : OF. P.O. N° 148-2016-2017-CJDDHH/CR-P
Proveído N° 621-2016-JUS/VMJ

FECHA : Miraflores, 24 de octubre de 2016

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, informarle lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES. -

- 1.1. Que, mediante Proyecto de Ley N° 175/2016-CR, la Congresista Marisa Glave Remy, presenta el Proyecto de Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.
- 1.2. Que, mediante OF. P.O. N° 148-2016-2017-CJDDHH/CR-P, el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, solicita opinión a éste Ministerio, respecto del Proyecto antes referido.
- 1.3. Que, mediante Proveído N° 621-2016-JUS/VMJ, el despacho Viceministerial de Justicia, deriva a ésta Dirección General, el documento de la referencia a efectos de emitir el informe correspondiente.

II.- ANÁLISIS. -

- 2.1.- La corrupción es un fenómeno social que dificulta el desarrollo de la sociedad y la gobernabilidad, pues no solo afecta gravemente el adecuado desenvolvimiento de las funciones de las instituciones que conforman el aparato estatal, generando desconfianza en sus instituciones, sino que también impide que miles de personas puedan acceder a mayores y mejores condiciones de vida, poniendo en riesgo la efectividad y vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ello genera desconfianza en el funcionario público, en la administración pública y, como consecuencia, en el Estado en general, erosionando progresivamente las bases de la sociedad democrática y los valores que inspiran una vida digna en armonía y justicia¹.



¹ Convención Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. División para asuntos de tratados. Segunda edición revisada, 2012. Nueva York, 2012.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

- 2.2.- De la revisión de nuestro texto constitucional, se advierte que no existe o contiene un mandato u obligación directa por parte del Estado en la lucha contra la corrupción, a diferencia de la obligación de garantizar los derechos humanos² o la obligación del Estado Peruano de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas³. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución⁴, que dispone un conjunto de reglas procesales relacionadas con los delitos de corrupción y de aquellos que afectan el patrimonio del Estado. Asimismo, una primera aproximación puede realizarse a partir del reconocimiento, en el artículo 2, inciso 5 del derecho de acceso a la información pública, a partir del cual se ha desarrollado un marco legal orientado a la transparencia de la información que se encuentra en poder del Estado, y que ha merecido un importante desarrollo por parte del Tribunal Constitucional por medio de sus pronunciamientos sobre el proceso de hábeas data⁵.
- 2.3.- Las disposiciones normativas citadas permiten afirmar que la lucha contra la corrupción constituye un objetivo que también cuenta con reconocimiento constitucional, en el entendido que los efectos de este flagelo generan un serio perjuicio para el respeto y garantía de valores y bienes jurídico-constitucionales indispensables para la vigencia efectiva de las normas constitucionales y los derechos fundamentales en ella reconocidos. En consecuencia, se trata de un objetivo que deberá ponderarse con otros bienes y derechos que cuentan con reconocimiento constitucional, en la perspectiva de buscar su armonización⁶, y la irrenunciable obligación constitucional del Estado Peruano de combatir y sancionar todo acto y forma de corrupción.
- 2.4.- Ahora bien, analizando el proyecto propuesto, es de anotar que el derecho penal tradicional, en aplicación del principio *societas delinquere non potest* (la sociedad o la empresa no puede delinquir), no admite la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas. Se parte de la premisa que el código penal sólo tiene por destinatario de sus normas a personas físicas que pueden ser sujetos activos del delito y, por tanto, punibles. Sin embargo, como consecuencia de la evolución de la concepción del sujeto y las obligaciones de los tratados y convenios internacionales, no solo en materia de corrupción, sino también del blanqueo de capitales y prevención de financiación del terrorismo, desde mediados de la década de los noventa se ha ido incorporando en la mayoría de las legislaciones penales de nuestro entorno jurídico — cultural, la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas⁷.
- 2.5.- Nuestro Código Penal incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las denominó **consecuencias accesorias**, pero sujetan



² Artículo 44 de la Constitución Política del Perú.

³ Artículo 8 de la Constitución Política del Perú.

⁴ Expediente N° 006-2006-PCC/TC LIMA. Fundamento Jurídico N° 11.

⁵ HUERTA GUERRERO, Luis. Prevención y sanción de la corrupción: una perspectiva constitucional. Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Año 2012. Pág. 189.

⁶ Idem. Pág. 190.

⁷ BACIGALUPO, Silvina y LIZCANO, Jesús. Informe "Análisis comparado sobre las obligaciones derivadas de los convenios internacionales contra la corrupción. Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas. Delitos relacionados con corrupción". Marzo, 2013, Pág. 30 y 33.

**PERÚ****Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos****Despacho
Viceministerial de
Justicia****Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

su aplicación a la previa identificación y sanción de la persona natural que cometió el delito. En ese sentido, el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116⁸, establece que el Juez debe imponer consecuencias accesorias siempre que se verifique en el caso concreto, cuando menos, lo siguiente: a) Que se haya cometido un hecho punible o delito. b) Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito. c) Que se haya condenado penalmente al autor, físico y específico, del delito.

- 2.6.- El artículo 105⁹ del Código Penal, prevé como medidas accesorias, en caso el sujeto activo perpetre un delito en el ejercicio de su actividad o utilizando la organización para favorecerlo o encubrirlo, las siguientes:
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.
 2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.
 3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
 4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
- 2.7.- Por su parte, el Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, prevé en sus artículos 90 al 93, una serie de reglas que se deben aplicar al momento de emplazar e incorporar en un proceso penal a las personas jurídicas, a fin de garantizar su derecho de defensa. Asimismo, en el artículo 313^o establece la aplicación de medidas preventivas contra las personas jurídicas. Por otro lado, existen leyes penales especiales que han previsto una regulación propia sobre las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas involucradas en determinados delitos. Se trata de los delitos tributarios¹⁰, delitos aduaneros¹¹ y lavado de activos¹².
- 2.8.- Con fecha 21 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la primera norma penal que criminaliza el accionar de las personas jurídicas, mediante la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal, imponiéndose medidas administrativas como multa, inhabilitación, suspensión, prohibición de llevar actividades a futuro, cancelación de licencias, concesiones, derechos, clausura y disolución de la compañía. Cabe anotar, que conforme lo establece la Tercera Disposición Complementaria Final, las reglas penales aplicables son las del Código Penal y las reglas de investigación, procesamiento y sanción son las del Código Procesal Penal.
- 2.9.- La referida norma contiene cinco secciones. La primera referida a disposiciones generales sobre el objeto de la ley y el ámbito subjetivo de la aplicación. La segunda en referencia a la atribución de responsabilidad



⁸ V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asunto: Consecuencias Jurídicas y Accesorias. Fundamento N° 14.

⁹ Artículo modificado por el Artículo I de la Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 julio 2007.

¹⁰ Decreto Legislativo N° 813, modificado por el Decreto Legislativo N° 1114. Artículo 17.

¹¹ Ley N° 28008, modificada por los Decretos Legislativos N° 1111 y N° 1122. Artículo 11.

¹² Decreto Legislativo N° 1106. Artículo 8.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

administrativa de las personas jurídicas, especificando los requisitos, características y autonomía de la responsabilidad. La tercera desarrolla las medidas aplicables a las personas jurídicas, detallando los tipos de consecuencias jurídicas. El cuarto establece los criterios de determinación de las medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional. El quinto se encuentra referido al Modelo de prevención, su tratamiento como eximente, los elementos mínimos que debe contener, sus efectos jurídicos y valoración, así como su certificación.

2.10.- Conforme se verifica del Proyecto de Ley propuesto, éste tiene por objeto, modificar la Ley N° 30424, a fin de ampliar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 384 (colusión), 387 (peculado), 397 (cohecho activo genérico), 397-A (cohecho activo transnacional), 398 (cohecho activo específico) y 400 (tráfico de influencias) del Código Penal; así como en los artículos 1 (actos de conversión y transferencia), 2 (actos de ocultamiento y tenencia), 3 (transporte o traslado de dinero o títulos valores de origen ilícito), 4 (tipo agravado), 5 (omisión de comunicación de operaciones sospechosas) y 6 (rehusamiento o retardo en el suministro de información) del Decreto Legislativo N° 1106.

2.11.- Al respecto creemos que a fin de lograr una administración pública honesta y transparente, capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sus instituciones erradicando lagunas de impunidad, en concordancia con la obligación constitucional del Estado peruano en la lucha contra la corrupción, consideramos viable la propuesta normativa, a fin de no limitar la responsabilidad penal de la personas jurídicas aun solo delito (cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal), sino extenderlo, teniendo en consideración que los tipos penales propuestos como peculado, colusión malversación, cohecho y lavado de activos son de gravedad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en estos últimos años son muy recurrentes, dificultando el desarrollo de la sociedad y la gobernabilidad, pues no solo afecta gravemente el adecuado desenvolvimiento de las funciones de las instituciones que conforman el aparato estatal, generando desconfianza en sus instituciones, sino que también impide que miles de personas puedan acceder a mayores y mejores condiciones de vida, poniendo en riesgo la efectividad y vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.12.- Asimismo, dicha propuesta se enmarca dentro de los alcances de la **Convención Interamericana contra la Corrupción**¹³, que reconoce a la corrupción como aquel fenómeno que socava la legitimidad de las instituciones públicas, afectando gravemente la sociedad y el desarrollo integral de las naciones, enfatizando que sus consecuencias son más graves aún si involucran el ejercicio de las funciones públicas. Asimismo, la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción**¹⁴, reitera la

¹³ Vigente en el Perú desde el 04 de Julio del año 1997. El su numeral 1 del artículo 26 expresamente señala que "...cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención". La Convención hace referencia a los tipos penales que son materia de inclusión en el presente Proyecto de Ley.

¹⁴ Vigente en el Perú desde el 14 de diciembre del año 2015.



V. QUINTEROS M.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

preocupación por los vínculos desarrollados entre la corrupción y otras formas de delincuencia, entre ellas la delincuencia organizada y la delincuencia económica; además del grave riesgo que implican las vastas cantidades de activos que podrían estar en manos de la corrupción, pues ello representa una amenaza tanto a la estabilidad política, como al desarrollo sostenible de los Estados. A nivel nacional, la propuesta normativa se enmarca, dentro del **Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción**¹⁵, instrumento cuyos objetivos estrategias y acciones buscan prevenir y luchar contra la corrupción en el país. El Plan tiene como actores al sector público, sector empresarial y sociedad civil.

- 2.13.- Por su parte la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la Sentencia C-320 de 1998, se ha pronunciado favorablemente respecto a la ampliación e implementación de un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas, concluyendo que este tipo de responsabilidad era perfectamente compatible con los lineamientos constitucionales emanados de la Ley Fundamental¹⁶. Nuestro Tribunal Constitucional, conforme se expuso líneas precedentes, ha señalado que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución.
- 2.14.- Es de resaltar, conforme lo señala la Exposición de Motivos del presente Proyecto, que no solo en países de la región se ha establecido en la mayoría de delitos o en su totalidad la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a diferencia de nuestro país que regula un solo tipo penal (cohecho activo transnacional) la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, México, Estados Unidos, Canadá, España y Francia han establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos de corrupción en sus Códigos Penales. Chile y Venezuela han establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- 2.15.- En ese sentido, consideramos que la propuesta aborda frontalmente la problemática de las personas jurídicas frente a la corrupción lamentablemente "institucionalizada" en nuestro país, planteando respuestas concretas, atendiendo principalmente el interés público del Estado de conocer y perseguir la (presunta) comisión de hechos delictivos graves y se abre la posibilidad de sancionar administrativamente a las personas jurídicas, así como de recuperar los activos sustraídos si es que el acto se ha consumado, reduciendo con ello los márgenes de impunidad en el ámbito de la corrupción empresarial; tanto más, si se tiene en consideración que nuestro país se encuentra realizando sendos esfuerzos a fin de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, para lo cual debe cumplir con conjunto de estándares que esta institución económica internacional le impone. Uno de



¹⁵ Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, aprobado mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 09 de diciembre de 2012.

¹⁶ La Corte constitucional Colombiana, señaló que La ley penal brinda la máxima protección jurídica a bienes valiosos para la persona humana y la vida social. La traducción de esta defensa en sanciones penales, tiene un propósito tanto comunicativo como disuasorio. Cuando la acción prohibida por la norma penal es susceptible de ser realizada por un ente –y no solamente por una persona natural–, limitar a esta última la imputabilidad penal reduce el ámbito de protección acotado por la norma. En el campo de ciertos delitos la extensión de la imputabilidad penal a las personas jurídicas, resulta necesaria para proteger debidamente a la sociedad.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho
Viceministerial de
Justicia

Dirección General de
Política Criminal y
Penitenciaria

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

esos estándares es la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción, siendo una de las medidas que en materia penal se ha adoptado en dicho esfuerzo y objetivo, es la dación de la Ley N° 30424.

- 2.16.- Por último, conforme lo establece la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, que **"... cualquier propuesta normativa que modifique la presente Ley o que implique la reducción o ampliación de su objeto y alcances, cuenta para su aprobación con un Informe Técnico no vinculante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción."**; en ese sentido, previo al estudio e informe del presente Proyecto de Ley por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, deberá recabarse la opinión técnica por parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN.

III.- CONCLUSIONES. -

- 3.1.- Estando a lo expuesto, la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, es de opinión favorable al Proyecto de Ley N° 175/2016-CR, que tiene por objeto, modificar la Ley N° 30424, a fin de ampliar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal; así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 1106.

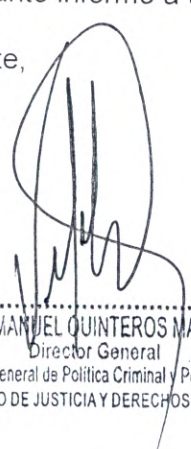
IV.- SUGERENCIAS. -

- 4.1.- La Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, sugiere que previo al estudio e informe del presente Proyecto de Ley por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, debe recabarse la opinión técnica por parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN, conforme lo establece la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424.

Es todo cuanto informó a usted para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,




VÍCTOR MANUEL QUINTEROS MARQUINA
Director General
Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS